



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
LIMITADA

E/CN.4/2004/L.11/Add.2
16 de abril de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
60º período de sesiones
Tema 21 b) del programa

**INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 60º PERÍODO DE SESIONES**

Proyecto de informe de la Comisión

Relator: Sr. Mike OMOTOSHO (Nigeria)

ÍNDICE*

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
II. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN EN SU 60º PERÍODO DE SESIONES	
A. <i>Resoluciones</i>	
2004/8. Los derechos humanos en el Golán sirio ocupado.....	3
2004/9. Asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados	5

* El documento E/CN.4/2004/L.10 y sus adiciones contendrán los capítulos del informe relativos a la organización del período de sesiones y a los diversos temas del programa. Las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión, así como los proyectos de resolución y decisión y otras cuestiones sometidas al Consejo Económico y Social, figurarán en el documento E/CN.4/2004/L.11 y sus adiciones.

ÍNDICE *(continuación)*

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
II. A. <i>Resoluciones (continuación)</i>	
2004/10. Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina	10
2004/11. Situación de los derechos humanos en Cuba	18
2004/12. Situación de los derechos humanos en Turkmenistán	19
2004/13. Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.....	23
2004/14. Situación de los derechos humanos en Belarús	29
2004/15. Cooperación con los representantes de los órganos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas.....	33

2004/8. Los derechos humanos en el Golán sirio ocupado

La Comisión de Derechos Humanos,

Profundamente preocupada por los sufrimientos de los ciudadanos sirios del Golán sirio ocupado causados por la violación de sus derechos humanos fundamentales desde la ocupación militar israelí en 1967,

Recordando la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre de 1981,

Recordando también todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en particular la más reciente, la resolución 58/23, de 3 de diciembre de 2003, en la que la Asamblea declaró que Israel no había cumplido la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad y le exigió que se retirara de todo el Golán sirio ocupado,

Reafirmando una vez más la ilegalidad de la decisión adoptada por Israel el 14 de diciembre de 1981 de imponer su legislación, jurisdicción y administración al Golán sirio ocupado, que ha tenido como consecuencia la anexión de hecho de ese territorio,

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es inadmisibles en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de derecho internacional,

Tomando nota con profunda preocupación del informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados (A/58/311), de 22 de agosto de 2003, y deplorando a ese respecto la colonización israelí de los territorios árabes ocupados y la constante negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y a recibirlo,

Guiada por las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y reafirmando la aplicabilidad al Golán sirio ocupado del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y las disposiciones pertinentes de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907,

Reafirmando la importancia del proceso de paz iniciado en Madrid sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, y del principio de "territorio por paz", y expresando su preocupación porque se ha interrumpido el proceso de paz en el Oriente Medio y su esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz sobre la base de la cabal aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), con miras al logro de una paz justa y completa en la región,

Reafirmando también sus anteriores resoluciones sobre esta cuestión, la más reciente de las cuales es la resolución 2003/5, de 15 de abril de 2003,

1. *Exhorta* a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 497 (1981), de 17 de diciembre de 1981, en la que el Consejo, entre otras cosas, determinó que la decisión israelí de imponer su legislación, jurisdicción y administración en el Golán sirio ocupado era nula y sin valor, y no tenía efecto alguno en el derecho internacional, y exigió que Israel revocase su decisión de inmediato;
2. *Exhorta también* a Israel a que desista de modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional y la condición jurídica del Golán sirio ocupado, y hace hincapié en que debe permitirse a las personas desplazadas de la población del Golán sirio ocupado que regresen a sus hogares y recuperen sus bienes;
3. *Exhorta además* a Israel a que desista de imponer la nacionalidad israelí y cédulas de identidad israelíes a los ciudadanos sirios en el Golán sirio ocupado y renuncie a sus medidas represivas contra ellos y a todas las demás prácticas mencionadas en el informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados;
4. *Declara* que todas las medidas y actos legislativos y administrativos que ha adoptado o pueda adoptar Israel, la Potencia ocupante, con el propósito de modificar el carácter y la condición jurídica del Golán sirio ocupado son nulos y sin valor, constituyen violaciones manifiestas del derecho internacional y del Convenio de Ginebra relativo a la protección de

personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y no tienen efecto jurídico alguno;

5. *Exhorta una vez más* a los Estados Miembros a que no reconozcan ninguna de las medidas o actos legislativos o administrativos mencionados más arriba;

6. *Pide* al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones intergubernamentales regionales y las organizaciones humanitarias internacionales, dándole la máxima publicidad posible, y que presente un informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 61º período de sesiones;

7. *Decide* incluir en el programa provisional de su 61º período de sesiones, con un alto grado de prioridad, el tema titulado "Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina".

*49ª sesión,
15 de abril de 2004.*

[Aprobada en votación registrada por 31 votos contra uno
y 21 abstenciones. Véase cap. VIII.]

2004/9. Asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando que todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de derechos humanos y otros instrumentos aplicables,

Consciente de que Israel es Parte en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, que es aplicable *de jure* al territorio palestino y a todos los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén oriental, y recordando la declaración adoptada el 5 de diciembre de 2001 en Ginebra por la Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra,

Recordando sus resoluciones anteriores, la más reciente de las cuales es la resolución 2003/7, de 15 de abril de 2003, y teniendo en cuenta la resolución 58/98 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2003, en las que, entre otras cosas, se reafirmaba el carácter ilegal de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados,

Acogiendo con beneplácito el hecho de que el Cuarteto haya presentado a las partes la hoja de ruta para avanzar hacia una solución permanente, en que se prevean dos Estados, del conflicto israelo-palestino y observando que en ella se hace un llamamiento a congelar todas las actividades de asentamiento, y *tomando nota* de las propuestas para una retirada de Israel de la Faja de Gaza, lo que podría representar un paso importante hacia la aplicación de la hoja de ruta, siempre y cuando: se realice en el contexto de la hoja de ruta; suponga un paso hacia una solución en que se prevean dos Estados; no conlleve el traslado de las actividades de asentamiento a la Ribera Occidental; haya un traspaso organizado y negociado de responsabilidad a la Autoridad Palestina; e Israel facilite la rehabilitación y reconstrucción de Gaza,

Profundamente preocupada por las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que continúan como consecuencia de la ocupación del territorio palestino ocupado,

Preocupada en particular porque el trazado del llamado muro de seguridad que construye Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluidos Jerusalén oriental y sus alrededores, pueda prejuzgar las negociaciones que se celebren en el futuro, hacer físicamente imposible la aplicación de una solución en que se prevean dos Estados y contribuir a que empeore más la situación humanitaria y económica de los palestinos,

Expresando su preocupación por la falta de cooperación plena del Gobierno de Israel con los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967,

Expresando también su preocupación por las continuas actividades israelíes de creación de asentamientos, que son un obstáculo para alcanzar una solución de dos Estados al conflicto, y, por consiguiente, ponen en peligro la seguridad a largo plazo tanto de los palestinos como de los israelíes,

Expresando además su preocupación por los riesgos que para la seguridad representa la presencia de los asentamientos en los territorios ocupados, como se indica en el informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de Sharm el-Sheij (informe Mitchell),

1. *Acoge con satisfacción* el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (E/CN.4/2004/6 y Add.1) e insta al Gobierno de Israel a que coopere con el Relator Especial para que éste pueda cumplir cabalmente su mandato;

2. *Expresa su grave preocupación:*

a) Por la continuación a un nivel más intenso del conflicto entre Israel y Palestina, que ha desencadenado una aparentemente interminable espiral de odio y violencia y causado mayores sufrimientos tanto a los israelíes como a los palestinos;

b) Por la continuación de las actividades de asentamiento ilegales de Israel en los territorios ocupados y las actividades conexas, como la expansión de los asentamientos, la expropiación de tierras, la demolición de viviendas, la confiscación y destrucción de bienes, la expulsión de palestinos y la construcción de carreteras de circunvalación, actividades que alteran las características físicas y la composición demográfica de los territorios ocupados, incluida Jerusalén oriental, y constituyen una violación del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949; los asentamientos son un obstáculo de primer orden para la paz y para la creación de un Estado palestino independiente, viable, soberano y democrático conforme a la resolución 1397 (2002) del Consejo de Seguridad, de 12 de marzo de 2002;

c) Por todos los actos de violencia, incluidos los atentados terroristas indiscriminados que han causado muertos y heridos entre la población civil, y los actos de provocación, incitación y destrucción, todos los cuales condena enérgicamente, e insta a la Autoridad Palestina a que demuestre con hechos concretos su determinación de luchar contra el terrorismo y la violencia extremista;

d) Por el elevado número de víctimas que se sigue produciendo en ambas partes, especialmente civiles, y, aunque reconoce el derecho de Israel a defenderse de los ataques

terroristas contra sus ciudadanos, insta al Gobierno de Israel a que haga todo lo posible por evitar las víctimas civiles y poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, que son contrarias al derecho internacional;

e) Por el bloqueo continuado de los territorios palestinos y de zonas dentro de éstos, y por la restricción de la libertad de circulación de los palestinos, como los extensos toques de queda impuestos en las ciudades de la Ribera Occidental durante largos períodos de tiempo, que contribuyen, junto con otros factores, al intolerable grado de violencia que ha reinado en la zona durante más de tres años, han sumido a la población civil en una situación humanitaria precaria en extremo y han tenido un efecto negativo sobre el disfrute de los derechos económicos y sociales en los territorios palestinos, lo que afecta en particular a los grupos más vulnerables de la población;

f) Por la continuación de la construcción del denominado muro de seguridad en los territorios palestinos, incluso dentro y alrededor de Jerusalén oriental;

g) Por el trazado del llamado muro de seguridad en la Ribera Occidental ocupada, y el hecho de que esté previsto que se aparte de la línea del Armisticio de 1949 que podría prejuzgar las negociaciones que se celebren en el futuro y haría físicamente imposible la solución en que se prevén dos Estados, y por la creación de una zona cerrada entre el llamado muro de seguridad y la línea del Armisticio y los consiguientes problemas humanitarios y dificultades económicas para los palestinos, muchos de los cuales se están viendo privados del acceso a los servicios esenciales, la tierra y los recursos hídricos;

3. *Insta* al Gobierno de Israel a que:

a) Cumpla plenamente lo dispuesto en las resoluciones anteriores de la Comisión sobre el tema, la más reciente de las cuales es la resolución 2003/7, de 15 de abril de 2003;

b) Ponga fin a su política en materia de asentamientos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén oriental, y, como primera medida para llegar a su desmantelamiento, detenga inmediatamente la expansión de los asentamientos existentes, incluido el "crecimiento natural" y otras actividades conexas;

c) Impida todo nuevo establecimiento de colonos en los territorios ocupados;

d) Aplique las recomendaciones relativas a los asentamientos hechas por la anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe a la Comisión en su 57º período de sesiones, sobre su visita a los territorios palestinos ocupados, Israel, Egipto y Jordania (E/CN.4/2001/114);

e) Adopte y aplique medidas severas, como la confiscación de armas y la aplicación de sanciones penales, con objeto de evitar los actos ilegales de violencia por parte de los colonos israelíes y otras medidas para garantizar la seguridad y la protección de la población civil palestina en los territorios ocupados;

4. *Exige* que Israel detenga y revierta la construcción del llamado muro de seguridad en el territorio palestino ocupado, incluso en Jerusalén oriental y sus alrededores, que se aparta de la línea del Armisticio de 1949 y es incompatible con las disposiciones pertinentes del derecho internacional;

5. *Insta* a las Partes a que apliquen de inmediato y plenamente, sin modificaciones, la hoja de ruta aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de reanudar las negociaciones para llegar a una solución política de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad y otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio, celebrada en Madrid el 30 de octubre de 1991, los Acuerdos de Oslo y los acuerdos posteriores, que permita que dos Estados, Israel y Palestina, vivan en condiciones de paz y seguridad y desempeñen plenamente el papel que les corresponde en la región;

6. *Decide* seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones.

*49ª sesión,
15 de abril de 2004.*

[Aprobada en votación registrada por 27 votos
contra 2 y 24 abstenciones. Véase cap. VIII.]

2004/10. Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como por las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) de 22 de noviembre de 1967, 338 (1973) de 22 de octubre de 1973, 1397 (2002) de 12 de marzo de 2002, 1402 (2002) de 30 de marzo de 2002, y 1403 (2002) de 4 de abril de 2002, en las que se exhortaba a las dos partes a que procediesen inmediatamente a aplicar una verdadera cesación del fuego y se pedía la retirada de las tropas israelíes, así como el cese inmediato de todos los actos de violencia, incluidos todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción,

Guiada por las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, las disposiciones del Protocolo adicional I al Convenio, de 1977, y las de la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907, y su Reglamento anexo,

Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos sobre la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios palestinos ocupados, desde la guerra del 5 de junio de 1967, incluida Jerusalén oriental,

Reafirmando la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios palestinos ocupados desde la guerra de junio de 1967, incluida Jerusalén oriental,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General relativas a la violación por los israelíes de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén oriental,

Recordando en particular la resolución 37/43 de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1982, en la que se reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por la independencia de la dominación extranjera y de la ocupación foránea y por la libre determinación, de conformidad con el derecho internacional,

Recordando la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,

Acogiendo con satisfacción el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Sr. John Dugard (E/CN.4/2004/6 y Add.1), y el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler (E/CN.4/2004/10/Add.2),

Manifestando su profunda preocupación por el hecho de que el Gobierno de Israel no haya cooperado con la Comisión de investigación de los derechos humanos, establecida en virtud de la resolución S-5/1 de la Comisión, de 19 de octubre de 2000, ni con otros relatores especiales competentes, en particular el Sr. Dugard,

Gravemente preocupada por el hecho de que siga empeorando la situación en los territorios palestinos ocupados y por las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular las ejecuciones extrajudiciales, los bloqueos, los castigos colectivos, la persistencia en la creación de asentamientos, las detenciones arbitrarias, el asedio de ciudades y aldeas palestinas, el bombardeo de distritos residenciales palestinos desde aviones, tanques y buques de guerra israelíes, y las incursiones en ciudades, aldeas y campamentos para matar a hombres, mujeres y niños, como sucedió en Yenin, Balata, Yan Yunis, Rafa, Ramalla, Gaza, Naplusa, Al Bira, Al-Amari, Yabaliya, Belén y Deisha, así como en los barrios de Al-Daraj y Al-Zaitun de la ciudad de Gaza, y también, en los últimos meses, en Rafa y el barrio de Al-Shajai'ia de Gaza, así como en las últimas masacres de los israelíes en los campamentos de refugiados de Al-Nusseirat y Al-Burreij en el centro de la Faja de Gaza el 7 de marzo de 2004,

Expresando grave preocupación por la continuación de las agresiones israelíes y por los muertos y heridos que causan, principalmente entre los palestinos, con un saldo de víctimas que asciende a más de 2.800 mártires y más de 25.000 heridos desde el 28 de septiembre de 2000,

Tomando nota de los informes que ha presentado a la Asamblea General desde 1968 el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, el último de los cuales fue el informe A/58/311,

Expresando grave preocupación por que Israel se siga negando a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos en las que se insta a Israel a poner fin a las violaciones de derechos humanos y se afirma la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén oriental,

Convencida de que las negociaciones y el logro de una paz justa y duradera deben basarse en las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973) y en otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, e incluir el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra, la necesidad de que cada Estado de la zona pueda vivir en condiciones de seguridad y el principio de territorio por paz,

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, la última de las cuales es la resolución 2003/6, de 15 de abril de 2003,

Recordando también la inadmisibilidad de la adquisición de territorios de otros por la fuerza, lo que constituye una norma imperativa (*jus cogens*) del derecho internacional,

Gravemente preocupada por la construcción por Israel de un muro dentro del territorio palestino ocupado con el fin de seguir expropiando tierras palestinas por la fuerza, con todas las graves consecuencias que ese muro tendrá para la comunidad palestina, en particular en los aspectos sociales, económicos, educativos, sanitarios y psicológicos, y que está acabando con cualquier posibilidad de lograr una paz verdadera basada en la solución de los dos Estados, un Estado independiente palestino y un Estado independiente israelí,

Afirmando que la construcción de ese muro en los territorios palestinos constituye una violación del derecho de los palestinos a la libre determinación y obstaculiza el ejercicio de ese derecho por parte de los palestinos,

Recordando a este respecto la resolución ES-10/13 de la Asamblea General, de 21 de octubre de 2003,

Recordando también el informe del Secretario General (A/ES-10/248) en el que se concluye que Israel está incumpliendo la exigencia de la Asamblea de que "detenga y revierta la construcción del muro en el territorio palestino ocupado",

1. *Reafirma* el legítimo derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación israelí a fin de liberar su tierra y poder ejercer su derecho de libre determinación de conformidad con los objetivos y propósitos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas;

2. *Condena enérgicamente* una vez más las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de ocupación israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén oriental;

3. *Condena enérgicamente también* la ocupación por Israel de los territorios palestinos por constituir una agresión y una afrenta contra la humanidad y una violación manifiesta de los derechos humanos;

4. *Condena enérgicamente además* la guerra desencadenada por el ejército israelí, en particular desde octubre de 2000, contra las ciudades y campamentos palestinos, que hasta la fecha ha causado la muerte de centenares de civiles palestinos, entre ellos mujeres y niños;

5. *Condena enérgicamente* de nuevo la práctica del ejército israelí de las llamadas "eliminaciones" o "ejecuciones extrajudiciales" de palestinos, práctica que no sólo constituye una violación de las normas de derechos humanos y una violación manifiesta del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y un quebrantamiento del estado de derecho, sino que también daña las relaciones entre las partes y por tanto constituye un obstáculo para la paz, e insta al Gobierno de Israel a respetar el derecho internacional y a poner fin de inmediato a estas prácticas;

6. *Condena enérgicamente, una vez más*, la creación de asentamientos israelíes y otras actividades conexas en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, como la construcción de nuevos asentamientos y la ampliación de los ya existentes, la expropiación de tierras, la administración arbitraria de los recursos hídricos y la construcción de carreteras de

circunvalación, todo lo cual no sólo constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, particularmente el artículo 49 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra) de 12 de agosto de 1949 y su Protocolo adicional I de 1977, según los cuales esas violaciones son crímenes de guerra, sino que también constituye un importante obstáculo para la paz, insta al Gobierno de Israel a aplicar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos relativas a los asentamientos israelíes, y afirma que el desmantelamiento de estos asentamientos constituye un factor fundamental para el logro de una paz justa, general y duradera en la región;

7. *Condena una vez más* la expropiación de viviendas palestinas en Jerusalén, Hebrón, y el resto del territorio palestino ocupado, la anulación de los documentos de identidad de los residentes de Jerusalén oriental y la política de imposición de impuestos anómalos y excesivos con el fin de obligar a los palestinos que viven en Jerusalén, que no pueden pagar tan altos gravámenes, a abandonar sus hogares y su ciudad, y de este modo allanar el camino para la judaización de Jerusalén, y exhorta al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a estas prácticas;

8. *Condena también, una vez más*, la utilización de la tortura contra palestinos durante los interrogatorios, dado que ello constituye una grave violación de los principios del derecho internacional humanitario y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y también contraviene el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y exhorta al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a esas prácticas y a enjuiciar a los culpables de estas violaciones de la justicia;

9. *Condena enérgicamente de nuevo* las ofensivas del ejército de ocupación israelí contra los hospitales y los enfermos y el uso de ciudadanos palestinos como escudos humanos durante las incursiones israelíes en las zonas palestinas;

10. *Condena enérgicamente una vez más* el hecho de que el ejército de ocupación israelí abra fuego contra las ambulancias y el personal paramédico y la práctica de impedir que las ambulancias y vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja lleguen a los heridos y los

muerdos a fin de transportarlos a los hospitales, dejando que los heridos mueran desangrados en las calles;

11. *Condena enérgicamente* los asesinatos en masa de palestinos a manos de las autoridades de ocupación israelíes, en particular los asesinatos de niños que se produjeron recientemente en Naplusa, Gaza, Rafa, Al-Nusseirat y Al-Burreij y que siguen produciéndose en la actualidad;

12. *Condena también enérgicamente* actos como la imposición de castigos colectivos, el asedio militar impuesto al territorio palestino y el aislamiento de las ciudades y aldeas palestinas entre sí mediante el establecimiento de puestos de control militares en las carreteras que se utilizan como trampa para matar a palestinos, el derribo de viviendas y el arrasamiento de tierras agrícolas, ya que estas prácticas contribuyen, junto con otros factores, a los actos de violencia que se vienen produciendo en la región desde hace más de tres años y medio, y exhorta al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a estas prácticas, a levantar el cerco militar de las ciudades y aldeas palestinas y a retirar los puestos de control militar, y afirma una vez más que esos castigos colectivos están prohibidos por el derecho internacional, constituyen graves violaciones de las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra y de su Protocolo adicional I, y son crímenes de guerra;

13. *Expresa grave preocupación, una vez más*, por las restricciones de la libertad de circulación impuestas por las autoridades ocupantes israelíes a Yasser Arafat, el Presidente palestino elegido democráticamente, en contravención de los artículos 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

14. *Condena enérgicamente* las campañas de detenciones en masa practicadas por las autoridades de ocupación israelíes para encarcelar a miles de palestinos sin juzgarlos o sin formular cargos penales contra ellos, en contravención del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra a este respecto;

15. *Reitera* que la destrucción por las fuerzas ocupantes israelíes de al menos 30.000 viviendas, instalaciones y bienes pertenecientes a familias palestinas es una grave violación de los artículos 33 y 53 del Cuarto Convenio de Ginebra y que el arrasamiento de tierras agrícolas, el arrancamiento de árboles y la destrucción de lo que queda de la infraestructura palestina son

una forma de castigo colectivo contra los palestinos, y constituyen graves violaciones de las disposiciones del derecho internacional humanitario así como un crimen de guerra según el derecho internacional;

16. *Reitera* que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica a los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén oriental, y considera ilegal y carente de validez todo cambio de la situación geográfica, demográfica e institucional de la ciudad de Jerusalén oriental con respecto a la situación anterior a la guerra de junio de 1967;

17. *Exhorta de nuevo* a Israel, la Potencia ocupante, a que desista de llevar a cabo cualquier forma de violación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y los demás territorios árabes ocupados, y a que respete los principios del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sus compromisos internacionales y los acuerdos que firmó con la Organización de Liberación de Palestina;

18. *Exhorta una vez más* a Israel a que se retire de los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén oriental, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos, como condición previa para lograr una paz justa, duradera y general en el Oriente Medio;

19. *Condena enérgicamente* la construcción del muro israelí en el territorio palestino ocupado y en la Ribera Occidental que constituye un nuevo pretexto de Israel para seguir confiscando por la fuerza tierras palestinas, pone en peligro la situación social, económica, cultural, educativa, sanitaria y psicológica de cientos de miles de palestinos y de sus familias, impide que los palestinos tengan acceso a sus recursos naturales y constituye un importante obstáculo para alcanzar una paz justa y duradera sobre la base de la solución de los dos Estados, un Estado palestino independiente y un Estado israelí independiente, que es la única solución que garantiza la paz y la estabilidad en la región, y también impide a los palestinos ejercer su derecho a la libre determinación; y exhorta a Israel a que detenga inmediatamente la construcción del citado muro y a que derribe la parte de este muro que ya ha sido levantada en los territorios palestinos ocupados desde 1967;

20. *Pide* al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 que investigue las violaciones por Israel de los principios y las bases del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y que, en el desempeño de su función de mecanismo de vigilancia, supervise la aplicación de estas recomendaciones e informe al respecto a la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones y a la Comisión en su 61º período de sesiones, hasta el final del mandato del Relator Especial establecido en la resolución 1993/2 A de la Comisión de 1993;

21. *Exhorta* a los órganos competentes de las Naciones Unidas a que estudien urgentemente la mejor manera de proporcionar al pueblo palestino la protección internacional necesaria hasta que cese la ocupación de los territorios palestinos por Israel;

22. *Pide* al Secretario General que señale la presente resolución a la atención del Gobierno de Israel y todos los demás gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones intergubernamentales regionales y las organizaciones humanitarias internacionales, que le dé la mayor difusión posible y que informe acerca de su aplicación por el Gobierno de Israel a la Comisión en su 61º período de sesiones;

23. *Pide también* al Secretario General que facilite a la Comisión todos los informes de las Naciones Unidas que se publiquen entre los períodos de sesiones de la Comisión y que traten de las condiciones en que vive la población del territorio palestino y de los demás territorios árabes ocupados bajo la ocupación israelí;

24. *Decide* examinar este asunto con carácter altamente prioritario en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

*49ª sesión,
15 de abril de 2004.
[Aprobada en votación registrada por 31 votos
contra 7 y 15 abstenciones. Véase cap. VIII.]*

2004/11. Situación de los derechos humanos en Cuba

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo en cuenta su resolución 2003/13, de 17 de abril de 2003,

Considerando que en la citada resolución la Comisión instó al Gobierno de Cuba a que recibiera a la Representante Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a que le prestara todas las facilidades necesarias para que pudiera cumplir el mandato establecido en la resolución 2002/18, de 19 de abril de 2002,

Consciente de que el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales es una obligación inherente a todos los Estados en el marco de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

1. *Estima* que el Gobierno de Cuba, como todos los demás Estados soberanos, independientemente de las excepcionales circunstancias internacionales imperantes que han obligado a muchos Estados a intensificar las medidas de seguridad, debería evitar la adopción de medidas que pudieran amenazar los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a un debido proceso de sus ciudadanos y, a este respecto, lamenta los hechos ocurridos el año pasado en Cuba en relación con algunas condenas a disidentes políticos y periodistas, según ha trascendido internacionalmente;

2. *Expresa su esperanza* de que el Gobierno de Cuba continuará esforzándose por robustecer la libertad religiosa y de que pondrá en marcha medidas con el fin de facilitar la transición hacia el establecimiento de un diálogo fructífero con todas las corrientes de pensamiento y grupos políticos organizados de su sociedad, a pesar del precario ambiente internacional, con el propósito de promover el desarrollo pleno de las instituciones democráticas y de las libertades públicas;

3. *Insta* al Gobierno de Cuba a que coopere, dentro del pleno ejercicio de su soberanía, con la Representante Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, facilitándole el cumplimiento de su mandato, como otros Estados soberanos deben hacerlo en cumplimiento de los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

4. *Decide* dar mayor consideración a este tema en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

*50ª sesión,
15 de abril de 2004.*
[Aprobada en votación registrada por 22 votos
contra 21 y 10 abstenciones. Véase cap. IX.]

2004/12. La situación de los derechos humanos en Turkmenistán

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando que todos los Estados miembros tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y tienen que cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos en que son Partes,

Consciente de que Turkmenistán es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Recordando su resolución previa sobre la cuestión, la resolución 2003/11, de 16 de abril de 2003, y tomando nota de la resolución 58/194 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 2003,

Tomando conocimiento de la conclusión en marzo de 2004 de la primera misión de evaluación de las necesidades de Turkmenistán por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Observando con reconocimiento que el Gobierno de Turkmenistán ha recibido al Enviado Personal del Presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para los Estados participantes de Asia central y al Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la citada organización,

Reafirmando que las medidas para mejorar la seguridad y luchar contra el terrorismo deben aplicarse en el marco de un pleno respeto de los derechos humanos y los principios democráticos,

Acogiendo con beneplácito el decreto sobre la libertad de circulación de 11 de marzo de 2004 y esperando que sea aplicable al gran número de personas que, lamentablemente, no pudieron abandonar el país tras la revocación de los visados de salida, y que se acompañe de otras medidas positivas,

Tomando conocimiento con aprecio de la decisión adoptada por el Presidente de Turkmenistán el 11 de marzo de 2004 de dictar un decreto sobre la libertad religiosa, con la esperanza de que sus disposiciones se apliquen de manera que se permita la inscripción sin trabas de todos los grupos religiosos minoritarios,

Acogiendo con beneplácito la disposición demostrada por el Gobierno de Turkmenistán para hablar de las cuestiones de derechos humanos con terceros interesados según las circunstancias de cada caso y para llegar a un acuerdo sobre la conveniencia de proseguir el diálogo y la cooperación práctica,

1. *Expresa su profunda preocupación* por:

a) La persistencia de una política oficial basada en la represión de todas las actividades políticas de oposición;

b) El uso indebido del sistema jurídico mediante la detención arbitraria, el encarcelamiento y la vigilancia de personas que intentan ejercer su libertad de opinión, expresión, reunión y asociación, y el acoso de sus familias;

c) Las restricciones aplicadas a la libertad de información y expresión, en particular mediante la represión de los medios de comunicación independientes;

d) Las restricciones aplicadas al ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, en particular mediante el acoso y la persecución de los miembros de grupos religiosos independientes y el uso discriminatorio de los procedimientos de inscripción de tales grupos;

e) La discriminación del Gobierno de Turkmenistán contra las minorías étnicas rusa y uzbeka y contra otras minorías en el ámbito de la educación y el empleo;

f) Las deplorables condiciones de las cárceles de Turkmenistán;

2. *Expresa su profunda preocupación* por el hecho de que el Gobierno de Turkmenistán siga sin responder a las críticas formuladas en el informe preparado por el Relator del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa acerca de los procedimientos de investigación, enjuiciamiento y privación de libertad tras la presunta tentativa de asesinato sufrida por el Presidente Niyazov en noviembre de 2002, así como por el hecho de que las autoridades de Turkmenistán no permitan que los órganos independientes correspondientes, los familiares y abogados accedan a los condenados ni faciliten ningún tipo de prueba para aplacar los rumores de que algunos de ellos han muerto mientras estaban presos;

3. *Insta* al Gobierno de Turkmenistán a que:

a) Garantice el pleno respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, religión, asociación y reunión, el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial legalmente constituido y la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, y deje de imponer penas de prisión a los objetores de conciencia;

b) Dé a los órganos independientes correspondientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como a los abogados y familiares, acceso inmediato a los presos, en especial a los detenidos tras los sucesos del 25 de noviembre de 2002;

c) Ponga fin a los desplazamientos forzosos y garantice la libertad de circulación en el interior del país;

d) Cumpla su obligación de velar por que todos los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia;

e) Elimine las nuevas restricciones aplicadas a las actividades de las asociaciones públicas, en particular las organizaciones no gubernamentales, estipuladas en la nueva Ley de asociaciones públicas, promulgada el 21 de octubre de 2003, y reflejadas en las nuevas normas

de inscripción de las organizaciones religiosas, publicadas en enero de 2004, y permita que las organizaciones no gubernamentales, en particular las de derechos humanos, y otros agentes de la sociedad civil lleven a cabo sus actividades sin trabas;

f) Aplique cabalmente las recomendaciones formuladas en el informe preparado por el Relator del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, colabore constructivamente con las diversas instituciones de esa organización y facilite nuevas visitas del Enviado Personal del Presidente en ejercicio de la organización para los Estados participantes de Asia central y del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de esa Organización;

g) Prosiga un diálogo constructivo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con su Oficina y coopere plenamente con todos sus mecanismos;

h) Presente informes a todos los órganos competentes de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y vele por la plena aplicación de sus recomendaciones;

4. *Insta* al Gobierno de Turkmenistán a que ponga en libertad, de inmediato e incondicionalmente, a todos los presos de opinión;

5. *Pide* al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, al Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, a la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, así como al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Representante Especial del Secretario General sobre los desplazados internos y al Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que estudien la posibilidad de visitar Turkmenistán como parte de su programa de visitas en el período 2004-2005, y exhorta al Gobierno de Turkmenistán a que facilite esas visitas;

6. *Decide* seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones.

50ª sesión,
15 de abril de 2004.

[Aprobada en votación registrada por 25 votos
contra 11 y 17 abstenciones. Véase cap. IX.]

**2004/13. Situación de los derechos humanos en la República
Popular Democrática de Corea**

La Comisión de Derechos Humanos,

Inspirándose en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de derechos humanos y otros instrumentos de derechos humanos,

Reafirmando que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y de cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de instrumentos internacionales,

Teniendo presente que la República Popular Democrática de Corea es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Recordando su resolución 2003/10, de 16 de abril de 2003,

Señalando que la presentación por la República Popular Democrática de Corea de su segundo informe periódico concerniente a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/1990/6/Add.35) y de su segundo informe periódico sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/65/Add.24) constituye un indicio de una participación más activa en las actividades de cooperación internacional en materia de derechos humanos, y animando a la República Popular Democrática de Corea a seguir presentando a tiempo sus informes,

Tomando nota de las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los informes presentados por la República Popular Democrática de Corea,

Expresando profunda preocupación por la precaria situación humanitaria en que se encuentra el país, en especial la prevalencia de la malnutrición infantil que, a pesar de recientes avances, sigue afectando a un porcentaje importante de niños, así como a su desarrollo físico y mental,

Reafirmando que incumbe al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea velar por el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda su población,

Subrayando la importancia de que se siga adelante de manera efectiva con el proceso de acercamiento entre las dos Coreas y tomando nota de los avances logrados recientemente en este sentido,

Felicitándose de que la República Popular Democrática de Corea haya celebrado consultas con algunos países sobre cuestiones de derechos humanos,

Deseando promover un criterio constructivo que permita avances concretos en la esfera de los derechos humanos,

1. *Expresa profunda preocupación* por la continuación de los informes que dan cuenta de violaciones sistémicas, generalizadas y graves de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, como las siguientes:

a) Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones públicas, detenciones extrajudiciales y arbitrarias, imposición de la pena de muerte por motivos políticos, existencia de gran número de campos de reclusión y empleo generalizado de los trabajos forzados, y falta de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad;

b) Sanciones impuestas a los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea repatriados del extranjero, como es considerar su salida como un acto de traición punible con una pena de internamiento, tortura, tratos inhumanos o degradantes o la pena de muerte, y el infanticidio en campos de reclusión y de trabajo;

c) Restricciones generalizadas y severas a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión, reunión pacífica y asociación y al acceso de todos a la información, y restricción de la libertad de circulación en el país o de viaje al extranjero;

d) Persistencia de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, en particular la trata de mujeres con fines de prostitución o el matrimonio forzado, el aborto forzado y el infanticidio por motivos étnicos, incluso mediante inyecciones

para unducir el parto, o el parto natural, por las madres repatriadas, incluso en los centros de detención preventiva y en los campos de trabajo;

2. *Toma nota con pesar* de que las autoridades de la República Popular Democrática de Corea no han creado las condiciones necesarias para permitir a la comunidad internacional, en particular el sistema de las Naciones Unidas, examinar esos informes de modo independiente, y pide al Gobierno que aborde la cuestión de estos informes y preocupaciones de una manera abierta y constructiva, entre otras cosas:

a) Facilitando toda la información pertinente relativa a las cuestiones mencionadas y eliminando las restricciones al acceso al país impuestas a la comunidad internacional;

b) Ratificando los instrumentos de derechos humanos en los que todavía no es parte la República Popular Democrática de Corea, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y cumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de los instrumentos de derechos humanos en que es Parte, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular con respecto al derecho de todos a no padecer hambre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como velando por que se adopten todas las medidas necesarias con este fin;

c) Observando las normas de trabajo internacionalmente reconocidas y considerando como una cuestión prioritaria el ingreso en la Organización Internacional del Trabajo y la adquisición de la condición de parte en el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, de 1930 (Nº 29), y el Convenio sobre la prohibición de las peores formas del trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999 (Nº 182), de la Organización Internacional del Trabajo;

d) Aplicando las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

e) Absteniéndose de sancionar a los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que se han trasladado a otros países y absteniéndose de considerar su salida como un acto de traición punible con una pena de internamiento, trato inhumano o degradante o la pena de muerte, y poniendo fin inmediatamente a los malos tratos y el infanticidio en campos de reclusión y de trabajo;

f) Cooperando con el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y cooperando sin restricciones con los procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos pertinentes a la situación de la República Popular Democrática de Corea, en particular el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y con las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos;

g) Fomentando un diálogo constructivo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina;

h) Resolviendo urgentemente, de manera clara y transparente, todas las cuestiones pendientes relacionadas con el secuestro de extranjeros;

i) Cooperando con los Estados vecinos para poner término a la trata de mujeres;

3. *Insta* a las autoridades de la República Popular Democrática de Corea a que velen por que las organizaciones humanitarias, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas, en particular el Programa Mundial de Alimentos, tengan acceso libre, pleno y seguro, sin obstáculos, a todas las partes del país para que se aseguren de que la asistencia humanitaria se distribuye con imparcialidad a quienes la necesitan, respetando los principios humanitarios;

4. *Pide* a la comunidad internacional que siga instando al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea a velar por que la asistencia humanitaria, en particular la alimentaria, destinada a la población del país se distribuya conforme a los principios

humanitarios, por que los representantes de los agentes humanitarios internacionales sean autorizados a desplazarse por todo el país para supervisar su distribución y por que se garantice el respeto de los principios fundamentales en materia de asilo;

5. *Pide* al Presidente de la Comisión que, tras celebrar consultas con la Mesa, designe una persona de reconocido prestigio internacional y experiencia en la esfera de los derechos humanos como Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea;

6. *Pide* al Relator Especial que establezca un contacto directo con el Gobierno y el pueblo de la República Popular Democrática de Corea, incluso realizando visitas al país, y que investigue la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y el cumplimiento por el Gobierno de las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y que presente un informe al respecto;

7. *Pide también* al Relator Especial que, en el cumplimiento de su mandato, solicite y obtenga información fidedigna y fiable, incluso mediante visitas al país, de todos los agentes pertinentes, en particular los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que entienda de estas cuestiones;

8. *Insta* al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea a que preste su cooperación plena y sin reservas y brinde su asistencia al Relator Especial en el cumplimiento de su mandato y que, a estos efectos, adopte todas las medidas necesarias para que el Relator Especial tenga acceso libre y sin trabas a cualquier persona de la República Popular Democrática de Corea con la que desee reunirse;

9. *Pide* al Secretario general que preste al Relator Especial toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato;

10. *Pide* al Relator Especial que presente sus conclusiones y recomendaciones a la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 61º período de sesiones;

11. *Pide* a todos los relatores especiales y representantes especiales pertinentes que examinen las supuestas violaciones de derechos humanos en la República Popular Democrática

de Corea y que informen a la Comisión en su 61º período de sesiones al respecto, y pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria para que los relatores especiales y representantes especiales puedan cumplir plenamente sus mandatos, incluso realizando visitas al país;

12. *Pide* a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que entable un diálogo amplio con las autoridades de la República Popular Democrática de Corea a fin de establecer programas de cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos y que presente sus conclusiones y recomendaciones a la Comisión en su 61º período de sesiones;

13. *Decide* seguir estudiando esta cuestión en su 61º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa y como cuestión de alta prioridad;

14. *Recomienda* al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de decisión:

"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 2004/13 de la Comisión de Derechos Humanos, de 15 de abril de 2004, aprueba la petición al Presidente de la Comisión de que designe una persona de reconocido prestigio internacional y experiencia en la esfera de los derechos humanos como Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y que éste establezca un contacto directo con el Gobierno y el pueblo de la República Popular Democrática de Corea, incluso realizando visitas al país, que investigue la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y el cumplimiento por el Gobierno de las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y presente un informe al respecto, y que solicite y obtenga información fidedigna y fiable de todos los agentes pertinentes. El Consejo aprueba asimismo la petición al Secretario General de que preste al Relator Especial toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato."

*50ª sesión,
15 de abril de 2004.*

[Aprobada en votación registrada por 29 votos
contra 8 y 16 abstenciones. Véase cap. IX.]

2004/14. Situación de los derechos humanos en Belarús

La Comisión de Derechos Humanos,

Inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de derechos humanos y otros instrumentos aplicables de derechos humanos,

Reafirmando que todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumplir las obligaciones internacionales que han contraído voluntariamente,

Consciente de que Belarús es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño,

Recordando su resolución 2003/14, de 17 de abril de 2003,

Celebrando que el Gobierno de Belarús haya aceptado en principio recibir al Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias,

Consciente de las solicitudes formuladas al Gobierno de Belarús por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias respecto de la desaparición del ex Ministro del Interior, Yury Zakharenko,

Señalando la decisión del órgano rector de la Organización Internacional del Trabajo de establecer una comisión investigadora, las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura acerca del tercer informe periódico de Belarús, que figuran en el informe del Comité sobre sus períodos de sesiones 25º y 26º (A/56/44), y las recomendaciones del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados que figuran en su informe sobre su misión a Belarús (E/CN.4/2001/65/Add.1), así como la falta de progresos del Gobierno de Belarús en la resolución de las deficiencias mencionadas,

1. *Expresa su profunda preocupación por:*

a) Los informes de fuentes fidedignas, comprendidas las declaraciones de antiguos investigadores y funcionarios superiores de las fuerzas del orden del Gobierno de Belarús y el informe del Consejo de Europa aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria, según los cuales altos funcionarios del Gobierno de Belarús están implicados en la desaparición forzada y/o ejecución sumaria de tres opositores políticos de las autoridades en funciones y de un periodista;

b) El proceso electoral y el marco legislativo de Belarús, que siguen siendo básicamente deficientes, como han demostrado las elecciones locales celebradas en marzo de 2003, a pesar de las detalladas recomendaciones que formuló la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa después de la celebración de las elecciones anteriores;

c) Las reiteradas informaciones acerca de arrestos y detenciones arbitrarias;

d) Las reiteradas informaciones acerca del hostigamiento y el cierre de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de minorías nacionales, medios de difusión independientes, partidos políticos de la oposición y sindicatos independientes, así como del hostigamiento de particulares que realizan actividades democráticas, incluidos medios de difusión independientes;

e) Las crecientes restricciones impuestas a las actividades de las organizaciones religiosas;

f) Los informes de hostigamiento de establecimientos independientes de orientación internacional, como la Universidad Humanitaria Europea y el Liceo de Humanidades Yakub Kolas;

g) El incumplimiento por el Gobierno de Belarús de la solicitud de plena cooperación con todos los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, formulada por la Comisión en su resolución 2003/14;

h) El enjuiciamiento de un dirigente de la oposición;

2. *Insta* al Gobierno de Belarús a que:

- a) Deje cesantes o suspenda a los funcionarios de las fuerzas del orden involucrados en desapariciones forzosas y/o ejecuciones sumarias, hasta tanto se realice una investigación imparcial, fidedigna y completa de esos casos;
- b) Vele por que se tomen todas las medidas necesarias para investigar plena e imparcialmente todos los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas, y por que sus autores sean juzgados por un tribunal independiente y, de ser condenados, sean castigados de forma compatible con las obligaciones internacionales contraídas por Belarús en materia de derechos humanos;
- c) Adecue el proceso electoral y el marco legislativo a las normas internacionales y facilite la participación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;
- d) Tome medidas para que las fuerzas de policía y de seguridad actúen de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales pertinentes;
- e) Establezca la independencia del poder judicial y ponga fin a la impunidad de las personas responsables de causar la muerte o lesiones a particulares;
- f) Ponga en libertad a los científicos y demás personas detenidas por razones políticas; ponga fin al hostigamiento de las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de difusión independientes y los activistas por la democracia y los derechos humanos; efectúe un examen de las leyes y prácticas nacionales relativas al registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales; enmiende la Ley de religión de 2002 para armonizarla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no la aplique hasta tanto se haya enmendado;
- g) Coopere plenamente con la oficina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Minsk y respete el mandato convenido por consenso por los Estados miembros de la organización;

h) Utilice la pericia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y del Consejo de Europa para garantizar que el proyecto de ley sobre los medios de difusión se conforma a las normas internacionales y no restringe, directa o indirectamente, la impresión o distribución de los medios de difusión independientes de Belarús;

3. *Insta* al Gobierno de Belarús a que coopere plenamente con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, en particular facilitando la visita que realizará en septiembre de 2004;

4. *Insiste* en que el Gobierno de Belarús debe cooperar plenamente con todos los mecanismos de la Comisión, incluso invitando al Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, a la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y a la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y también solicitando asistencia técnica;

5. *Decide* nombrar un Relator Especial, con cargo a los recursos existentes, para que establezca contactos directos con el Gobierno y el pueblo de Belarús, con miras a examinar la situación de los derechos humanos en ese país y supervisar los progresos de la elaboración del programa de educación en derechos humanos para todos los sectores de la sociedad, en particular la aplicación de la ley, el poder judicial, el personal de las prisiones y la sociedad civil, y que informe a la Comisión en su 61º período de sesiones;

6. *Decide* examinar esta cuestión en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

*50ª sesión,
15 de abril de 2004.
[Aprobada en votación registrada por 23 votos
contra 13 y 17 abstenciones. Véase cap. IX.]*

2004/15. Cooperación con los representantes de los órganos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas

La Comisión de Derechos Humanos,

Reiterando su preocupación por las persistentes informaciones sobre actos de intimidación y represalia contra los particulares y los grupos que tratan de cooperar con las Naciones Unidas y con representantes de los órganos de derechos humanos de la organización,

Profundamente preocupada por el aumento de la gravedad de las represalias denunciadas y porque las víctimas sufren la vulneración de sus derechos humanos más fundamentales, incluidos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, así como el derecho a no ser torturado ni sometido a otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes,

Preocupada también por las informaciones sobre incidentes de particulares a los que se ha impedido que recurran a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Recordando su resolución 2003/9, de 16 de abril de 2003, y tomando nota con interés del informe del Secretario General sobre esta cuestión (E/CN.4/2004/29),

1. *Insta* a los gobiernos a que se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra:
 - a) Quienes traten de cooperar o hayan cooperado con representantes de los órganos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas, hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información;
 - b) Quienes recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica a tal fin;
 - c) Quienes presenten o hayan presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos;
 - d) Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos;

2. *Condena* todo acto de intimidación o represalia de los gobiernos contra los particulares y los grupos que tratan de cooperar con las Naciones Unidas y con representantes de los órganos de derechos humanos;

3. *Pide* a todos los representantes de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a los órganos creados en virtud de tratados encargados de supervisar la observancia de los derechos humanos que sigan adoptando medidas urgentes, de conformidad con sus mandatos, para tratar de impedir que se produzcan dichos actos de intimidación y represalia y que se obstaculice de cualquier forma el recurso a los procedimientos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

4. *Pide también* a esos representantes y órganos creados en virtud de tratados que sigan incluyendo en sus respectivos informes a la Comisión de Derechos Humanos, a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos o a la Asamblea General una referencia a las denuncias de casos de intimidación o represalia y de obstaculización del recurso a los procedimientos de derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas, así como una relación de las medidas que hayan adoptado a ese respecto;

5. *Pide* al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de dichos representantes y órganos creados en virtud de tratados;

6. *Invita* al Secretario General a que presente a la Comisión en su 61º período de sesiones un informe con una recopilación y un análisis de toda la información disponible, de todas las fuentes pertinentes, sobre presuntas represalias contra las personas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución;

7. *Decide* volver a examinar la cuestión en su 61º período de sesiones.

50ª sesión,
15 de abril de 2004.
[Aprobada sin votación. Véase cap. IX.]